

ETNIA, ESTADO Y NACION; UNA LUCHA SIN FIN**Historia Muy Vieja.-**

Es posible, que al hacer su peculiar declaración del 19 de enero sobre la mejor forma de resolver el problema que le planteó al país la insurrección que estalló en Chiapas el 1° de enero de 1994, el señor Luis Enrique Grajeda Alvarado, director del Centro Patronal de Nuevo León, no se haya percatado -y quizá tampoco le hubiera importado-- que su visión y actitud en torno a ese tema tenía una raíz muy honda, de siglos, y cuyo fruto ha sido una brutal y en gran medida innecesaria lucha entre las etnias, el Estado y la nación, lucha que esta en el corazón del proceso político mexicano de los últimos quinientos años.

"Si van a morir ahí miles de gentes -dijo el representante de los empresarios regiomontanos--, que se mueran, pero se tiene que acabar con el problema. El problema está afectándonos seriamente en las relaciones internacionales, en nuestro prestigio internacional. El movimiento armado en Chiapas ha generado desconfianza, por lo que yo creo que hay que subirle a la temperatura, para darle una respuesta a esto en forma seria y drástica. Esta decisión tendrá todo el respaldo de la sociedad mexicana". Palabras más, palabras menos, esa actitud fue la que asumieron los responsables de la política federal y los emprendedores agricultores sonorenses de la segunda mitad del siglo pasado al enfrentarse a los reclamos en defensa de sus tierras de los

indios yaquis que comandaba José María Leyva, mejor recordado como Cajeme. El resultado fue que, efectivamente, "miles de gentes" se murieron, unas ahí mismo y otras en Yucatán, a donde fueron deportados tras ser capturados por el ejército federal. Se creyó entonces que, efectivamente, por la vía de las armas se había acabado "con el problema", pues el Valle del Yaqui floreció, se ligó definitivamente a la economía global y logró buen "prestigio internacional". Pero en realidad "el problema" no se resolvió, la Revolución Mexicana lo volvió a abrir, los yaquis continuaron siendo un dolor de cabeza para la élite local y para el gobierno federal hasta que, en un acto de justicia, de sentido común y de buena política, en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas selló solemnemente la paz con lo que quedaba del pueblo yaqui y les dejó en posesión de lo que desde el principio pedían: medio millón de hectáreas, base de sus ocho pueblos (Pótam, Vícam, Tórim, Cocórit, Rahum, Belén, Huírivis y Bacúm) y de autoridad tradicional: una estructura basada en un gobernador que se renueva anualmente y que, al margen aunque no en contra de lo que dice la constitución, es su verdadera y legítima autoridad.

Los sonorenses y las autoridades porfiristas y revolucionarias que combatieron a los yaquis, tenían, a su vez, antecedentes en otras, que recién lograda la independencia, se habían enfrentado a Juan Ignacio Jusacamea, "Juan Banderas", y sus yaquis por las mismas razones: la tierra y su independencia. Pero la cadena histórica sigue hacia atrás, por otros tres siglos, hasta llegar al fallido intento

de Diego de Guzmán por introducirse en tierras yaquis en 1533. Fue esa lucha entre la nación yaqui y el Estado -un Estado que primero representó a la corona de España y luego, a partir de 1821, a los intereses de una nación mexicana que, en realidad y en el mejor de los casos, sólo reflejaba entonces los intereses de una minoría- una constante hasta que la notable resistencia y tenacidad de los yaquis, combinada con un cambio en la sensibilidad y naturaleza de la autoridad nacional, llevó a un acuerdo para evitar que los dueños originales de la tierra fueran eliminados, como sociedad y cultura, del mapa mexicano.

Rastreando el Problema

En el libro que acaba de publicar Enrique Florescano, historiador profesional si los hay, en plena madurez y dominio de su materia, titulado precisamente, *Etnia, Estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México* (Aguilar, 1997), es un rastreo de la dolorosa huella de ese enfrentamiento de siglos, y que aún no concluye, entre las etnias --los descendientes de los pobladores originales--, y la autoridad estatal, empeñada en crear una nación sin hacer lugar para aquellas sociedades nativas que han insistido en reclamar su derecho a seguir en posesión de sus tierras, de su cultura y de su estructura de autoridad, es decir, de su autonomía. Pareciera que el intolerante Estado español pasó integra al mexicano su divisa: "sólo hay un camino, el mío", al menos esa es la conclusión que se desprende del magnifico, largo y erudito ensayo

de Enrique Florescano, que surgió como un intento de respuesta a una pregunta tan simple como fundamental: "Por qué, después de nuestro largo conocimiento del problema indígena, otra vez estalla la rebelión en tierras pobladas por los campesinos mayas".

La ruta que eligió el historiador para responder y explicar el drama que se está desarrollando en las montañas chiapanecas, fue la de remontarse varios miles de años atrás, al mundo indígena y a sus grandes civilizaciones originales -olmecas, mayas, mixtecos, teotihuacanos, toltecas, mexicas- para describir y captar su esencia. Y esa esencia se encuentra en la íntima liga de la comunidad con la tierra, en una enorme complejidad religiosa y, también, en estructuras de poder muy autoritarias, que mantienen complejas divisiones internas que nada tienen de democráticas y mucho de opresivas; el caciquismo es tan autóctono como el maíz. De la "matriz nativa", el análisis pasa al examen de la relación entre los indígenas y la sociedad y el Estado coloniales, para desembocar en el siglo XIX y el duro choque entre el nuevo Estado nacional y el viejo mundo indígena. El siglo XX se queda afuera del ensayo, pero al concluir las 512 páginas del ensayo, el lector ya tiene los elementos para explicárselo.

Los Conceptos

Para desentrañar y hacer vigentes las experiencias del pasado en relación a lo que hoy ocurre en Chiapas, el historiador se armó de los tres conceptos que forman el título de su obra. La etnia,

definida como el conjunto de "personas establecidas históricamente en un territorio determinado que poseen un lenguaje y una cultura común, reconocen ante otros grupos sus propias peculiaridades y diferencias y se identifican con un nombre propio". El Estado, que según Norberto Bobbio, es: "un orden jurídico que tiene como finalidad ejercer el poder soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que le pertenecen". Y finalmente la nación, un concepto que, idealmente, podría hacer compatible la convivencia entre etnia y Estado al introducir la solidaridad y el respeto en la relación de subordinación de la primera al segundo. La nación aparece cuando "sus miembros se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de miembros. [Y] Es ese reconocimiento del prójimo como individuo de su clase lo que los convierte en nación". Desafortunadamente, y como bien lo demuestra Enrique Florescano, el drama de México es que por mucho tiempo la nación mexicana no correspondió con la definición y quizá siga sin existir del todo.

La etnia en si misma es un germen de Estado y bien se puede comportar como un Estado en pequeño y entrar en conflicto con el mayor si no media entre ambos la aceptación, solidaridad y respeto como resultado de la extensión efectiva de la nacionalidad. Desafortunadamente, en el caso de México la idea de nación surgió y se formó de tal manera que sólo aceptó a la etnia en la medida en que esta estuviera dispuesta a diluirse hasta desaparecer en favor del

Estado nacional.

La razón de que en México haya surgido una nacionalidad excluyente en el siglo XIX, se encuentra en las originales y profundas divisiones de la sociedad nativa, mismas que fueron agravadas e institucionalizadas por tres siglos de colonización y de racismo.

La Nación para Algunos, no para Todos.

Como bien afirma Enrique Florescano, en el territorio de lo que hoy es México y a partir del siglo XVI, tuvo lugar una experiencia política única por su magnitud: el recién formado Estado español --que surgió de la guerra contra los árabes, y por tanto fue muy intolerante con lo ajeno-- insistió en trasplantar sus valores a una sociedad enormemente fragmentada y absolutamente extraña -la indígena-, y lo hizo de la manera a la que estaba acostumbrado: por la fuerza, sin reparar en el costo -costo que, obviamente, corrió por cuenta de los vencidos, los indígenas- pues a la superioridad tecnológica europea se unió el convencimiento absoluto de la superioridad moral de sus valores, de su civilización.

Para imponer los valores cristianos europeos a la sociedad nativa -compuesta, desde la perspectiva del conquistador, de menores de edad perpetuos-- y para gobernarla y explotarla, el Estado español impidió que los indios desarrollaran una conciencia que los integrara al sistema global. El resultado lógico fue: "la formación de una identidad reducida al ámbito local", es decir, del arraigo de esa pequeña nación que era la etnia. Por ello, cuando en el siglo XIX y

tras la independencia, una élite criolla y mestiza quiso hacer de México una nación moderna, se encontró con que la "matriz nativa" era un material muy refractario. Había pues que acabar con los indios, sino físicamente, si como miembros de sus pequeñas naciones, y para ello, el mejor camino era poner fin a la propiedad colectiva de la tierra, cemento de la identidad étnica. El problema fue que las comunidades indígenas habían aprovechado la desorganización inicial del Estado independiente y durante la primera mitad del siglo XIX habían fortalecido sus estructuras y avanzado en la recuperación de su autonomía.

Una Construcción Nacional Amasada con Sangre

La tarea de construcción nacional que llevó a cabo la élite política del siglo pasado, la conservadora y la liberal, desembocó muy pronto en una a fondo entre el Estado y su nacionalidad excluyente contra las comunidades indígenas, en particular contra aquellas que como los yaquis o los mayas, habían sido capaces de formar sus propios ejércitos y un incipiente aparato estatal. Aquí el trabajo de Leticia Reina, *Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906* (Siglo XXI, 1980), resulta ser de consulta indispensable. Los documentos de la época muestran con gran claridad la raíz y razón de las rebeliones de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Sierra Gorda (Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato), Puebla, Veracruz y Zacatecas.

La tesis que sustenta Enrique Florescano en su trabajo es clara:

la política seguida por el Estado, particularmente desde las reformas borbónicas hasta el Porfiriato, fue innecesariamente excluyente de los intereses de las etnias. Mucha de la sangre derramada en el choque que entonces tuvo lugar resultó innecesaria. El proyecto de la gran nación mexicana pudo y debió ser compatible con el respeto de la identidad étnica, que incluía la preservación de sus tierras.

Conclusión

De lo expuesto por su autor en *Etnia, Estado y nación*, queda claro que si bien el pasado limita las posibilidades del presente y del futuro, ni uno ni el otro están determinados de manera absoluta, la libertad individual y colectiva existe, sobre todo si el pasado es asimilado como lección. Así pues, lo que ha acontecido en Chiapas es muy explicable en función de lo que ahí aconteció antes, pero no estaba escrito que necesariamente tenía que ocurrir lo que hoy esta teniendo lugar; Acteal y sus muertos no eran inevitables. La clase dirigente tuvo --¿tiene?-- la posibilidad de aprender del pasado, de romper con la cadena histórica de conflicto entre etnia, Estado y nación, pero hasta el momento no ha tenido la voluntad, la disposición o la capacidad de hacerlo. Queda, pues, en manos de otros actores políticos --partidos, organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general--, el intentar dar forma a un tipo de nación que permita la relación armónica entre lo que queda de las sociedades indígenas y el Estado. No es fácil, pero se puede, como bien lo mostró el presidente Cárdenas al dar contenido a la paz con los yaquis.

